

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00774-00

Clase de Proceso: Medida de Protección

I. ASUNTO

Procede el Despacho a decidir el recurso de apelación interpuesto contra la decisión Administrativa proferida por la Comisaría Quinta de Familia- Usme II de esta ciudad, el 22 de octubre de 2021 dentro de la solicitud de Medida de Protección instaurada por Diana Carolina Granados Benítez contra Jairo Alexander Eraso Guerrero

II. ANTECEDENTES

La señora DIANA CAROLINA GRANADOS BENITEZ acudió ante la Comisaría Quinta de Familia- Usme II de Bogotá para solicitar medida de protección a favor suyo por las agresiones de que fue víctima por parte de su cónyuge JAIRO ALEXANDER ERASO GUERRERO.

La Comisaría Quinta de Familia- Usme II de Bogotá avocó conocimiento de la medida de protección el 12 de octubre de 2021 y adoptó medidas provisionales, ordenando al presunto agresor abstenerse de ejecutar cualquier acto de violencia contra la accionante, y señaló fecha para audiencia prevista en el artículo 15 de la ley 294 de 1996 modificado por el artículo 15 de la Ley 575 de 2000.

Notificados en debida forma, se realizó la audiencia el 22 de octubre de 2021, diligencia a la que compareció la denunciante y el accionado, en dicha diligencia se escucharon los cargos y descargos de cada una de ellas, oportunidad en que la denunciante se ratificó sobre los hechos que originaron la medida de protección, así mismo se escucharon descargos del accionado, procediendo la Comisaría a imponer medida de protección a favor de la señora DIANA CAROLINA GRANADOS BENITEZ contra el señor JAIRO ALEXANDER ERASO GUERRERO, a quien se ordenó abstenerse de ejercer cualquier acto de violencia intrafamiliar o cualquier conducta que comporte maltrato, igualmente se ordenó el desalojo del señor JAIRO ALEXANDER EREAZO GUERRO del inmueble que comparte con la accionante, y la obligación de acudir a las partes a tratamiento terapéutico profesional.

La anterior decisión fue notificada en estrados a las partes y el accionado JAIRO ALEXANDER ERASO GUERRERO interpuso recurso de apelación para surtirlo ante los jueces de familia, contra la orden de desalojo argumentando que fue una situación voluntaria del accionado desalojar la vivienda por ende no puede imponerse sin pruebas la orden por parte de la Comisaría.

III. CONSIDERACIONES

La violencia siempre trae secuelas para quien las sufre, tales como cicatrices enfermedades a veces no perceptibles inmediatamente, resentimiento, inestabilidad emocional e incluso muerte; quien sufre de violencia intrafamiliar en general, asume comportamientos sociales en ocasiones insatisfactorios que pueden ser multiplicadores de estas mismas conductas. En la Constitución Política de Colombia, título preliminar destaca que la Familia es el núcleo fundamental de la sociedad y como tal el Estado debe protegerla.

La violencia se tiene como factor destructivo de la unidad y la armonía y ha sido definida como conducta realizada por uno de sus miembros contra otro que le ocasione o le pueda ocasionar la muerte; daño en el cuerpo o la salud, sufrimiento físico, emocional, psicológico, sexual, que afecte o pueda afectar su autonomía o su dignidad. De ahí que se consideren como violencia los golpes, amenazas, agresiones verbales, intimidaciones, privación de la libertad, entre otros.

Una de la manifestación más grave de violencia la constituye la ofensa verbal, la evocación de antecedentes vergonzantes de los miembros de la familia, el reproche innecesario, la reincidencia de episodios enojosos que su propio autor quiere olvidar, estos contribuyen a desquiciar la estabilidad familiar, son violencia moral.

La convivencia y las relaciones familiares carecen de soportes como igualdad de derechos y deberes entre sus miembros, respeto recíproco entre todos los integrantes.

Cualquier forma de violencia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la Ley.

El artículo 4o. de la Ley 294 de 1.996, modificado por el artículo 1o. de la Ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al juez civil Municipal o promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 18 Ibídem prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

En el caso de la referencia el accionado, recurre la decisión administrativa por no estar de acuerdo con la orden de desalojo.

Como material probatorio reposan en el expediente el registro único de gestión y el informe de valoración de riesgos mediante el cual la accionante indicó: “El 02 de octubre de 2021 me fui con el niño a retirar un dinero que me habían consignado, compre unas arepas y me fui para la casa y comenzó JAIRO ALEXANDER ERAZO GUERRERO a decirme que si había madrugado a recibir la plata del mozo de chile y las fotos que le mando, comenzó a decirme que no tenía derecho a nada, que clase de educación iba a darle a los niños, que no serbia (sic) para nada, me fui para donde mi abuela y me llamaron para trabajar, y el llamo a decirle a los niños que si era verdad o mentira el hecho de ir a trabajar, dice que yo no apporto y que

no tengo derecho a la casa, es celoso y posesivo me acosa, me esculca las cosas dice que tengo mozos y que soy lo peor. Tenemos un matrimonio desde hace 13 años con dos hijos en común de 13 y 8 años de edad.” Los anteriores hechos fueron ratificados por la accionante dentro de la audiencia llevada a cabo el 22 de octubre de 2021.

En descargos el señor JAIRO ALEXANDER ERASO GUERRERO, indicó que desde que salió del ejército empezaron a suceder muchos hechos de maltrato psicológico y verbal entre él y la accionante, que entre la pareja nunca hay comunicación y siempre se tratan con grosería y altanería, manifestó ser cierto que le reclamara a la accionante por no aportar con los gastos del hogar, refirió un episodio en que le quito a la accionada el celular y lo guardo, y que han ocurrido hechos de violencia de parte y parte.

Ahora bien, conforme a las probanzas que reposan en el expediente se tiene que se acredita la existencia de agresiones verbales, psicológicas y económicas del señor Jairo Alexander Eraso Guerrero contra la señora Diana Carolina Granados Benítez, encontrándose justificada la medida de protección adoptada por la comisaria de familia, tendiente a evitar futuras agresiones, y propendiendo principalmente a que cese cualquier escenario de violencia y maltrato de toda índole contra la accionante por parte de su cónyuge.

Atendiendo a lo anterior, se debe tener en cuenta que la medida de desalojo, tratándose de medidas de protección de violencia intrafamiliar, tiene como fin separar al agresor de la víctima, ante un riesgo para su vida, integridad física o de salud inmediata, a corto plazo o en un futuro, pero con cierto grado de certeza del riesgo que correría la víctima, lo que se encuentra probado en el caso objeto de estudio, como quiera que se encuentran acreditados los hechos de violencia verbal, psicológica y económica ejercida por el accionado contra la señora Diana Carolina Granados Benítez, esto al observarse conductas tendientes a limitar la libertad de la víctima, de interactuar con otras personas de género masculino, teniendo comportamientos de celos para con ella, actuar que refleja la creencia arraigada de ser propietario de su pareja, vigilando sus conductas e incluso llegando al punto de esconderle su celular o esculcarle sus pertenencias, esto sumado a la violencia económica ejercida por el accionado bajo la percepción del rol de la mujer relegado a guardar del hogar y los hijos dentro del ámbito doméstico, mientras su rol de proveedor lo hace sentir que tiene poder sobre la mujer, sin respetar sus decisiones y deseos.

Por lo anterior, concluye el Despacho que, si bien dentro del acuerdo suscrito entre las partes, el accionado de manera voluntaria acepta desalojar el inmueble que comparte con la accionante, la orden proferida por la Comisaría de Familia se encuentra justificada en cuanto la misma busca entre otras cosas, garantizar el cumplimiento del acuerdo de voluntades al que llegaron las partes, y evitar futuras agresiones y la escala de las mismas, entendiendo que estas se pueden desatar en cualquier momento dados las situaciones de violencia que se han evidenciado hasta ahora, deteriorando así la salud física y mental no solo de la víctima, sino del núcleo familiar, al no contar con un espacio habitacional libre de violencia, situación que constituye un llamado para la autoridad administrativa de adoptar medidas que garanticen los derechos de la aquí accionante señora Diana Carolina Granados Benítez y la proteja de cualquier escenario de violencia que vulnere su integridad personal.

Así las cosas, el recurso no está llamado a prosperar toda vez que la medida de protección adoptada por la Comisaría Quinta de Familia- Usme II de esta ciudad, el 22 de octubre de 2021, se efectuó con observancia de las formalidades legales y garantizando el debido

proceso, y está encaminada a cesar y prevenir situaciones de violencia o agresiones graves de cualquier tipo.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión administrativa proferida por la Comisaría Quinta de Familia- Usme II de esta ciudad, el 22 de octubre de 2021 en la solicitud de Medida de Protección promovida por Diana Carolina Granados Benítez y Jairo Alexander Eraso Guerrero.

SEGUNDO: En firme la presente providencia, se ordena la devolución del expediente a la Oficina de origen. Oficiase dejando las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE,

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

Firmado Por:

**Viviana Marcela Porras Porras
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 030
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

70e7685b614b625ff80eafce3f1f02bae27ad15b720adb1e7c6655db47fed6

Documento generado en 28/03/2022 06:59:38 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>